

23 de julio de 2013

Los orientadores son indispensables en la educación

Omaira Morales

Fecode reafirma la relevancia de la figura del orientador en la escuela. El Ministerio, por su parte, subestima su labor y pretende que el docente de aula realice sus actividades.

El problema de orientación a nivel nacional es bastante grande. En Bogotá, por ejemplo, los orientadores son definidos para muchas actividades y no tienen algo específico qué desarrollar, debido que desde el Ministerio les dan muchas actividades.

Y ninguna de esas actividades se encuentra en la parte pedagógica. En ese sentido, un trabajo conjunto entre la Asociación Distrital de Educadores y la Secretaría Distrital de Educación (por iniciativa de la primera) está buscando la manera de disminuir el parámetro de estudiantes por orientador, que en estos momentos están llegando a 550, porque un orientador con tantos estudiantes no puede desarrollar ninguna labor.

Los parámetros a nivel nacional son vergonzosos: 1 orientador por 800 alumnos; 1 orientador por institución; 1 orientador por sede de institución educativa. Ante lo cual, lo más válido es preguntarse ¿qué tan eficaz es su intervención profesional?

“A partir de la Ley 715 y el Acto Legislativo 01, el Ministerio de Educación Nacional empezó la racionalización de la plan-



ta y en ese sentido, solamente vale el maestro que está en el aula, los otros, que ayudan en el proceso educativo, quedaron por fuera”, indicó William Agudelo Sedano, Presidente de la ADE. El profesor Alexander Hurtado agrega: “El Ministerio piensa que todos los docentes tienen que ser orientadores, pero no se da cuenta que los docentes tienen unas funciones específicas y que no puede cumplir esa función

En consecuencia, es claro que el Ministerio subestima la importancia de tener acompañamiento en la escuela de un profesional de la psicología que no solo ayuda a los jóvenes a resolver problemas sociales, personales y psicológicos, sino a

construir e identificar sus proyectos de vida.

“La importancia del orientador es encontrar que el estudiante se proyecte, que tenga un proyecto de vida que integre tanto la educación como la comunidad; que pueda desarrollar proyectos de paz, de convivencia; también que pueda desarrollar con los niños alternativas que le sirvan a la sociedad colombiana, asumida en el conflicto social en que nos encontramos en este momento”, continúa el profesor Hurtado.

En Bogotá, como ya se alcanzó la cobertura, la ADE acordó con la Secretaría que en vez de destinar 70 mil millones de pesos en cámaras para vigilar a los alumnos, ingresar a orientadores que reemplacen a los provisionales. Con esta decisión refuerza la importancia de estos profesionales cuando problemas como el matoneo, el microtráfico y el suicido cada vez más inciden en los jóvenes. A la vez, abre el debate de la relevancia de los orientadores en la escuela ¿o es el que al Ministerio no le preocupa la atención de estas problemáticas?

Educación, otro problema pendiente en el Catatumbo

Yesid Quiroga

Hoy día a los maestros que laboran en el Catatumbo deben hacer grandes sacrificios, y hasta exponer sus vidas, para asegurar la educación de sus alumnos.

Los bloqueos del Catatumbo atraparon a unos 80 docentes que no pueden salir de la zona ni recibir alimentos. Asinort recogió comida para ellos pero las auto-

ridades se niegan a llevárselos. Una docente tuvo que salir del área en helicóptero porque se complicó su estado de salud.

Los problemas sociales que avivan la protesta, incluyen deficiencias educativas. Escuelas e instituciones educativas en muy malas condiciones, largas caminatas para

llegar a ellas, falta de implementos y maestros provisionales.

Así resume la problemática, el presidente de la Asociación de Institutores de Nortes de Santander (Asinort), Hugo Cárdenas Vega: “La educación se presta por contrato a través de una cooperativa en casi toda la zona del Catatumbo. No hay maestros nombrados en propiedad. Y los maestros que se nombran en poco tiempo resultan amenazados”. A los maestros que trabajan en los munic-



pios más alejados no se le está prestando el servicio de salud y la alimentación que reciben es muy escasa.

Entre todo esto, lo peor es que las soluciones que provee el gobierno se dirigen a la privatización, con construcciones que posiblemente serán entregadas a particulares. A lo cual se le agrega la falta de oportunidades económicas, la militarización, la carencia de políticas agrícolas y los 10.000 muertos que ha dejado la violencia. Una mezcla que resulta contraproducente para la zona y obviamente para Colombia.

El Catatumbo sí puede ser zona de reserva campesina

Omaira Morales

El Estado colombiano ha reforzado tanto sus fuerzas militares, que cuando el pueblo colombiano se levanta no tiene más opción que recurrir a ellas pues no sabe ni tiene cómo dar soluciones al pueblo reclamante.

Las protestas en el Catatumbo por las zonas de reserva campesina y desarrollo empresarial no son nuevas, vienen desde 1998. Fueron creadas por la Ley 60 de 1994, que las desarrolla entre el Artículo 79 y el 84.

A través de esta figura el Estado garantizará derechos sociales, económicos y culturales a los campesinos, les permitirá participar en planificación y decisiones regionales y les apoyará para ser empresarios medios, pero en la práctica esto es letra muerta.

Francisco Bustamante, de la Asociación Minga, expone que “el Catatumbo ha sido históricamente una zona totalmente abandonada por el Estado. Allí solamente han hecho presencia Ecopetrol de vez en cuando con el interés de construir oleoductos y entregar algunas migajas al campesinado. Por eso, a los campesinos de buenas a primeras, que eran entregados al agro, les llegó las semillas de la coca y con la semilla llegó la guerra a fondo”.

Los campesinos no se oponen a la explotación racional de los recursos sino a las locomotoras que depredan sin conciencia. Piden tener derecho a vivir de su terruño, que bien explotado cosecharía progreso para todos; y que sus recursos como el carbón, petróleo, níquel, uranio, no se extraigan sin dejarles nada a cambio más que la desolación de la tierra



infértil.

El conflicto actual tiene una trascendencia enorme, pues rebela la crisis en la que se encuentra Colombia a causa de las falencias en las políticas del gobierno Santos. “El país ha dejado a los campesinos en segundo plano durante mucho tiempo; esa es la realidad. Allí hay graves crisis sociales y se necesita una salida, obviamente, el campesinado está mandando una ampliación de la reserva campesina. El Presidente ha dicho que sí, pero al ritmo de la Ley 160. Durante el gobierno de Uribe no hubo una sola zona de reserva campesina más y yo creo que sí existe una forma de llegar a la salida: reconocer al campesinado como un actor importante en nuestra sociedad”, explicó Marco Romero, Presidente del Codhes.

Un país que es eminentemente rural, pero que no invierte en sus zonas rurales, obviamente está conducido a una crisis social. Por eso el Catatumbo se convulsiona, “la reserva campesina es una figura

que a nosotros nos garantiza el territorio y la estadía de los campesinos para vivir y reclamar la tierra que nos han venido arrebatando las multinacionales junto con el Gobierno Nacional”, comenta el líder campesino Jhony Abril.

Detrás de la negativa del gobierno a ceder hay intereses políticos y económicos específicos. Guillermo Quintero, otro líder, añade, “en concreto creemos que no nos quieren constituir la zona de reserva campesina porque hay intereses de las multinacionales, intereses económicos en la región”.

La región del Catatumbo está integrada por 9 municipios colombianos, por los cuales pasa el río que le da nombre a la zona. Luego, este desemboca en el lago Maracaibo de Venezuela. Tales características geográficas hacen de este un territorio rico, productivo y con un gran potencial.

Para finalizar, es bueno dejar varias cosas claras. Los bloqueos sobrepasaron el mes porque el gobierno no le prestó la suficiente atención al tema. Varios negociantes tuvieron que pararse de la mesa porque el gobierno suele enviar diplomáticos sin potestad y hacer promesas que no cumple. Y si la protesta acaba sin resultados, es no porque haya soluciones sino porque la represión y las necesidades minaron a la población. Los problemas del campo colombiano seguirán.

A Santos le preocupan los excesos de su fuerza pública

Omaira Morales

Las advertencias de la ONU acerca del accionar represivo del Esmad en las manifestaciones del Catatumbo son una clara muestra de que este gobierno acude a la represión opresiva cuando debe recurrir al diálogo.

La protesta de los campesinos en el Catatumbo encontró un aliado. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU evidenció los excesos de la fuerza pública y la falta de caminos de diálogo para solucionar el paro en el nororiente del país.

Told Howland, representante de esta oficina en Colombia, declaró: “nuestro equipo no estaba en esos momentos por ejemplo cuando los 4 campesinos perdieron su vida, pero concertamos que gran parte de esas manifestaciones de 10 ó 15 mil personas fueron pacíficas. Estamos cuestionando en esos momentos sobre las 4 muertes de los campesinos ahí es importante para la Fiscalía investigar y si hubo o no hubo fuerza legítima”. Las manifestaciones de Told Howland fueron recibida por el gobierno de Santos como una amenaza contra su accionar frente al paro, y calificada por el Ministro de Defensa como una intervención temeraria e irresponsable. Horas



después decidió no ampliar la permanencia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia. La excusa de Santos es que “estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato o si se prolonga sería por muy corto tiempo. Porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir no necesitamos más oficinas de derechos humanos de la ONU en nuestro país”.

Enseguida, diferentes voces calificaron esta declaración como ‘otra metida de patas de Santos’. En medio del inicio de la

visita oficial de la Alta Delegada de Naciones Unidas para Derechos Humanos tuvo que salir el Ministro del Interior para rectificar la información y decir que se requiere ese acompañamiento internacional, sobre todo, cuando se habla de consolidar la paz. La respuesta de Howland es más comedida, “hicimos un comunicado para llamar la atención de la importancia de hacer una investigación profesional apropiada para llegar a una conclusión de Estado, porque nosotros no estamos aquí para juzgar”.

El gobierno de Juan Manuel Santos está evidentemente preocupado porque la ONU podría seguir indagando. Y entonces, descubrir las múltiples irregularidades que cometen el Esmad y la fuerza pública en todas las manifestaciones (que no son pocas) y deslucir el entramado de cifras que mantienen la imagen del gobierno a nivel internacional.

Se avecina paro en el sector salud

Yesid Quiroga

Los trabajadores del sector salud hablan de entrar a paro nacional como última medida para evitar que el gobierno siga aprobando leyes en contra de la salud de los colombianos y colombianas.

El viernes 19 de julio, organizaciones sociales y sindicales se tomaron las capitales del país para exigir que el gobierno acabe de una vez por todas con el modelo de ley e implemente un nuevo sistema que sí reconozca a la salud como derecho.

Es un último esfuerzo por impedir que el Congreso apruebe el proyecto de ley ordinaria, porque, como comentaba uno de los manifestantes, “lo que hace es profundizar en el modelo, es decir, lo que no le habían entregado también se lo entregan a la EPS. Van a convertir a los hospitales en las bolsas de empleo de las gestoras de las EPS, como las denominan ahora”.

Están acallando las voces que direccio-



nan el camino y que están en el pueblo mismo: “queremos que el gobierno nacional mire el proyecto que presentamos con las organizaciones sindicales y la comunidad, ya que el proyecto de ley del gobierno es totalmente nocivo para el pueblo colombiano y los trabajadores”.

El problema afecta a todos y todas, “salen los trabajadores, salen los ciudadanos diciéndole al gobierno no aceptamos y rechazamos contundentemente la acción de pretender de conformar un sistema anacrónico y que despilfarra los recursos para la salud pública”.

Desde dentro del movimiento se cocina un paro de enormes dimensiones en el sector salud. “La asamblea ha tomado la decisión de iniciar la preparación de un paro nacional de los trabajadores de la salud a partir del 19 de agosto de este año, para lo cual, se enriquece un plan de acción que empieza con reuniones y asambleas que se desarrollaran en cada uno de los hospitales”.

Un reconocimiento a la UP

Omaira Morales

Con el reconocimiento de su personería jurídica la UP tiene una segunda oportunidad. El miedo no ha pasado, pero este es un paso a la verdadera justicia y reparación que las familias de los líderes políticos asesinados reclaman.

La Unión Patriótica nació con vientos de esperanza y cambios en 1985 por los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancourt. Desde entonces, inició un camino de triunfos que le permitió alcanzar dos candidatos presidenciales.

Sus dirigentes tuvieron tal aceptación en la sociedad que fueron asesinados para evitar que expandieran su poder: 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes. Según investigaciones académicas, servicios de seguridad del Estado, gamonales, grupos paramilitares y narcotraficantes exterminaron esta fuerza política con la desaparición y el asesinato de unos 6.000 militantes.

El 9 de julio el Consejo de Estado le devolvió su personería jurídica porque reconoció que no la perdió por falta de apoyo popular, sino porque sus líderes



fueron asesinados. Esto le permite nuevamente pensar en actividades electorales pero hay miedo porque desde el Puro Centro Democrático, las fuerzas de la derecha, han dicho en los medios que la UP fue una combinación de armas y política.

Dentro de la justicia, el panorama de impunidad es desolador. Ahora la UP busca reorganizarse, armar convergencias con el

resto de partidos y movimientos de izquierda y aprovechar el conflicto Santos-Uribe para construir, según sus propios dirigentes, un país con justicia social.

Omer Calderón, Presidente de la UP, sostiene: “Nosotros, entonces, procederemos a continuar en los escenarios en la lucha porque las medidas de reparación implican medidas de restitución de la Unión Patriótica, entre otros derechos. Recuperar las curules que fueron negadas con el uso de las armas contra nuestros concejales, diputados y representantes a la Cámara y senadores. Igualmente, que se fomente en Colombia la memoria de lo que sucedió con la Unión Patriótica, cuando fuerzas del establecimiento promulgaron o impulsaron toda una acción sistemática de liquidación”.

fecode
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES

LA REPARACIÓN NO ES UNA MEDIDA
POR LA DEMOCRACIA,
EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DERECHOS DEL MAGISTERIO

Inicio Quiénes Somos Galería Comisiones Enlaces Contáctenos

La información que el magisterio necesita conocer está a un click.

Visite:

www.fecode.edu.co

DIRECTOR, Jairo Arenas Acevedo. **PERIODISTAS**, Omaira Morales Arboleda y Yesid Quiroga. **CAMARÓGRAFO**, Mauricio Ángel González. **ASISTENTE**, Karen Buitrago. **PRODUCTOR**, Paola Mejía. **EDITOR**, Óscar Olvera. **DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO**, Ernesto E. Ballesteros Zapata.